

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310502120210030801
Proceso:	Ordinario
Demandante:	ÁLVARO OCHOA ARIAS
Demandado:	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	27/03/2023
Decisión:	CONFIRMA, MODIFICA, ADICIONA Y REVOCA PARCIALMENTE

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	ÁLVARO OCHOA ARIAS
DEMANDADAS	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
ORIGEN	Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001-31-05-021-2021-00308
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ÁLVARO OCHOA ARIAS contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

El señor Álvaro Ochoa Arias formula demanda contra Colpensiones y Porvenir S.A, pretendiendo se declare: **i)** la ineficacia de la afiliación efectuada al Régimen de Ahorro Individual -RAIS- y en virtud de ello, se ordene su retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM- administrado por Colpensiones, quien debe aceptar el traslado del demandante y como consecuencia de lo anterior se condene a **ii)** Porvenir S. A., a trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones, bonos, con los rendimientos causados, y que de su propio patrimonio asuma el pago de los descuentos realizados para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, así como los rendimientos financieros que hubiese obtenido de haberse quedado en el RPM, si es del caso serán asumidos del propio patrimonio de la AFP del RAIS; y a **iii)** a Colpensiones, recibir todas las cotizaciones, bonos, etc., con los rendimientos trasladados por Porvenir S.A.; **iv)** lo extra y ultra petita; y **v)** costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

<sup>1</sup> 01PrimeraInstancia; 02Demanda.pdf, Págs. 1/4.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el día 17 de febrero de 1958, inició su vida laboral el 9 de marzo de 1984 con la empresa INDUSTRIAS METALÚRGICAS APOLO, empleador a través del cual comenzó a cotizar ante el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- hasta el día 30 de agosto de 1997, fecha en que efectuó traslado de régimen pensional con destino al RAIS a través de Porvenir S.A., sin que previo a ello fuera informado sobre las consecuencias que conllevaría suscribir dicho traslado, incumpliendo el deber de diligencia que impone su responsabilidad profesional, ni informaron sobre ventajas o desventajas que implicaría dicho acto. El 10 de febrero de 2020, solicitó a Porvenir S.A. proyección pensional en ambos regímenes, indicando la entidad en respuesta que de continuar cotizando en el RAIS hasta los 62 años le otorgarían una mesada pensional equivalente al SMLMV; a través del fondo de Garantía de Pensión mínima, mientras que en el RPM su mesada equivaldría a \$1.144.378.00.

El día 10 de febrero de 2020, radicó ante Colpensiones su retorno al RPM, pero no indicó si la entidad dio respuesta o no.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Quienes conforman la pasiva, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Porvenir S.A.<sup>2</sup>**

Afirma no existen razones fácticas o jurídicas que conduzcan a la ineficacia o a la nulidad del acto jurídico de traslado, al haber suscrito de forma consciente, espontánea, y sin presiones el formulario de afiliación, previo a una asesoría adecuada en los términos y requisitos exigidos por las normas que se hallaban vigentes para la fecha en que se produjo, en ejercicio de la libertad de elección del actor, y con plena capacidad legal, sin que la AFP esté facultada para imponer o condicionar su escogencia, más cuando el afiliado tenía la facultad de retractarse y no lo hizo. El afiliado como consumidor financiero tenía el deber de informarse sobre las implicaciones que tendría dicho traslado, igualmente pudo hacer uso de su opción de retracto o trasladarse en varias oportunidades y no hizo uso de tal facultad. De considerarse que no hubo una debida información, ello no es suficiente por si solo para declarar la ineficacia del acto de traslado, pues ello derivaría a lo sumo, en una nulidad relativa que da solo derecho a la rescisión del acto. Afirmo que las acciones para demandar la ineficacia se encuentran prescritas. Excepcionó: prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

#### **ii) Colpensiones<sup>3</sup>**

Por carecer de fundamentación fáctica y legal, manifestando que el acto de traslado es válido al haberse realizado en ejercicio legítimo del derecho a la libre escogencia y produjo efectos jurídicos al haber efectuado el actor aportes al RAIS, por lo que

---

<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia; 04ContestaciónPorvenir.pdf.

<sup>3</sup> 01PrimeraInstancia; 05ContestaciónColpensiones.pdf

Colpensiones como un tercero ajeno a dicho acto, no puede asumir obligaciones. El actor no hizo uso de su deseo de retornar al RPM, encontrándose a la fecha dentro de la imposibilidad de traslado por encontrarse a menos de 10 años de pensionarse. Excepcionó: Carga dinámica de la prueba - particularidades del caso; imposibilidad de retornar al statu quo ante por múltiples afectaciones al sistema general de pensiones, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, improcedencia de intereses moratorios, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho de afiliación al RPM, falta de causa para demandar, falta de interés en su vida pensional, buena fe, mala fe/ temeridad, devolución de cuotas de administración- seguros previsionales- comisiones. Indexados, imposibilidad de condena en costas, prescripción y compensación.

### **Sentencia de primera instancia<sup>4</sup>**

El 5 de octubre de 2022, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del demandante del RPM al RAIS, y que su afiliación al primero lo ha sido sin solución de continuidad. Ordenó a Porvenir S.A trasladar a Colpensiones, y a ésta recibir los saldos de la cuenta de ahorro individual del actor, incluidos los rendimientos financieros y los saldos del Fondo de Garantía de Pensión mínima, al igual que las cuotas de administración y las sumas del seguro previsional, estas dos últimas sumas indexadas al momento del pago, descontadas de los aportes realizados en favor del demandante durante todo el tiempo que estuvo afiliado en el RAIS, incluyendo los tiempos de afiliación con otras AFP. Declaró probada la excepción de ausencia de prueba del vicio en el consentimiento y no probadas las demás. Condenó en costas a Porvenir S.A., fijando como agencias en derecho la suma de 1 SMLMV en favor del demandante.

El juez de primera instancia advirtió el precedente judicial vigente en la materia y señaló que a Porvenir S.A., le correspondía demostrar el cumplimiento de su deber de información antes de la suscripción del formulario de afiliación, carga probatoria que no satisfizo con el interrogatorio de parte, ni con los documentos aportados al proceso, declarando en consecuencia la ineficacia de traslado de régimen pensional, amparado en el artículo 272 de la Ley 100 de 1993, en la medida de que el monto de la pensión de vejez que recibiría el actor en el RAIS sería muy inferior al que podría ofrecerle el RPM, lo cual atenta contra la dignidad humana y los derechos de los trabajadores.

### **Recurso de apelación**

**Apoderada de Porvenir S.A:** inconforme con lo decidido solicita se revoque íntegramente y se absuelva a la entidad de lo pretendido argumentando para ello que si existió información necesaria y suficiente al demandante para que tomara una decisión consiente, quedando probado además del interrogatorio de parte que el actor si conocía aspectos del régimen; se aportó además el formulario de afiliación que es válido y constituye prueba suficiente para determinar que se tomó tal decisión libre y

---

<sup>4</sup> 01PrimeraInstancia; 15ActaPrimeraTramiteFallo.Pdf

voluntariamente, y en consecuencia se deberá revocar la orden de trasladar los dineros recibidos con motivo de la afiliación hacia Colpensiones.

En caso de confirmar la declaratoria de ineficacia, solicita no se condene al traslado de gastos de administración, de seguro provisional y aportes al FGPM, por tratarse de dineros ya descontados por autorización de ley, y ya no hacen parte del patrimonio de la entidad, por lo que ya cumplieron su cometido para la generación de frutos de rendimientos que se ven reflejados de forma positiva la cuenta del afiliado, y en cuanto a los seguros de previsionales, se pagaron a una aseguradora para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte que cubrieron al afiliado durante toda su permanencia al RAIS, y ordenar el traslado de tales sumas atentaría con el principio de sostenibilidad financiera del sistema

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez concedido el término a las partes para alegar de conclusión en esta sede, las demandadas lo recorrieron oportunamente, mientras que la parte actora se abstuvo de pronunciarse.

**Porvenir S.A.** <sup>5</sup> Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y al formular recurso de alzada en torno a la validez del traslado de régimen suscrito por el actor, así como los valores que se ordenaron devolver por gastos de administración, seguro provisional y aportes al FGPM, insistiendo que su devolución implica un enriquecimiento sin causa. desconociendo las restituciones mutuas; además resalta que toda decisión judicial debe tener por objetivo la sostenibilidad financiera del sistema, siendo urgente hacer un análisis macro de las consecuencias derivadas de autorizar estos traslados, tal y como se analizó por el H. Tribunal Superior de Medellín en Sala Extraordinaria del 14 de agosto de 2019 donde unificó su jurisprudencia dentro de sentencia con radicado 05001310500720150129501, igualmente hace cita del Concepto de la Superintendencia Financiera de Colombia del 17 de enero de 2020. Tampoco se debe ordenar su indexación porque implicaría una doble condena a su representado pues el detrimento del valor de los aportes se busca resarcir con los rendimientos financieros generados, los cuales ya se ordenaron devolver. Finalmente refiere que no debe ser condenada en costas, toda vez que la entidad siempre obró de buena fe objetiva.

Por su parte, **Colpensiones**<sup>6</sup> solicita se revoque la sentencia de instancia, exponiendo los argumentos que sustentaron la contestación de demanda, resaltando que existió falta de interés del demandante en su vida pensional pues en el RAIS el afiliado interactúa de forma activa con el fondo de pensiones para alcanzar una pensión a temprana edad y otros beneficios, lo que permite concluir que no se está ante una falta de asesoría o error en el consentimiento, pues la asesoría que acepta el actor haber recibido no es falsa. Sobre la inversión de la carga de la prueba afirma que no debe interpretarse tal regla sin analizar cada caso particular sin mayor análisis, pues no puede desconocerse escenarios en los que la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante, y otros actos relacionados con las actividades financieras le permitieron

---

<sup>5</sup> 02SegundaInstancia; 03AlegatosPorvenir2120210308.Pdf

<sup>6</sup> 02SegundaInstancia; 03AlegatosPorvenir2120210308.Pdf

escoger acertadamente el régimen pensional, debiendo estar a cargo de la parte actora probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico de la demanda, pues la AFP cumplió con las obligaciones vigentes al momento en que se suscribió el traslado.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración, como el que su afiliación al RPM se considere sin solución de continuidad, así como lo concerniente a los conceptos que deben trasladarse desde la AFP del RAIS hacia Colpensiones.

### Hechos relevantes probados documentalmente

Álvaro Ochoa Arias, nació el 17 de febrero de 1958<sup>7</sup>. Inicialmente se afilió al extinto ISS el 9 de marzo de 1984<sup>8</sup> El 4 de agosto de 1997 suscribió formulario de afiliación ante la AFP Porvenir S.A.<sup>9</sup>. Para el 20 de febrero de 2020 contaba con 1.413 semanas cotizadas durante toda su vida laboral<sup>10</sup>, de las cuales 261.6 lo fueron ante el ISS. El día 07 de febrero de 2020, radicó reclamación administrativa a Colpensiones, solicitando lo pretendido en la demanda<sup>11</sup>, sin que esta hubiera sido resuelta, o por lo menos no obra respuesta de ella en el expediente.

Obra además Certificación Electrónica de Tiempos Laborados CETL que da cuenta que el demandante estuvo vinculado al servicio del Departamento de Antioquia<sup>12</sup> entre el 6 de mayo de 1992 y el 1° de septiembre de 1996, periodo por el cual se hicieron descuentos para pensión a través de la administradora Pensiones de Antioquia.

Al respecto cabe precisar, que aun cuando en principio dicha circunstancia implicaría una causal de nulidad, por cuanto Pensiones de Antioquia como una de las administradoras del régimen público a la que estuvo afiliado el demandante, pues de acuerdo a lo previsto en los artículos 6, 11 y 34 del **Decreto 692 de 1994**, luego de la

---

<sup>7</sup> 01PrimerInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 32. No se aportó registro civil de nacimiento, pero si de su cédula de ciudadanía que indica tal fecha la cual no fue discutida por la pasiva dentro del proceso.

<sup>8</sup> 01PrimerInstancia; 02Demanda.pdf, Págs. 53/55; 04ContestacionPorvenir.pdf pág. 26

<sup>9</sup> 01PrimerInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 45.

<sup>10</sup> 01PrimerInstancia; 04ContestacionPorvenir.pdf pág. 29

<sup>11</sup> 01PrimerInstancia; 02Demanda. Págs62/64

<sup>12</sup> 01PrimerInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 57.

expedición de la Ley 100 de 1993, aparte del extinto ISS, también estaban facultadas como administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida las demás cajas o entidades del sector público o privado que **administraban sistemas de pensiones, mientras no se ordenara su liquidación**, y tal entidad no fue llamada al proceso, su vinculación a la litis en el sublite resulta inocuo, pues de declararse la ineficacia del traslado, en virtud del **artículo 3° del Decreto 2520 de 2000**<sup>13</sup>, **al haberse desvinculado** laboralmente el demandante del Departamento de Antioquia, no sería Pensiones de Antioquia la entidad obligada a recibirlo.

El Decreto 692 de 1994 también dispuso que, quienes al 31 de marzo de 1994 se encontraban vinculados al ISS podían continuar en dicho instituto, sin que fuese necesario el diligenciamiento del formulario o comunicación en la que constara su decisión, **e igual tratamiento se aplicó a los servidores públicos que se encontraban afiliados a una caja, fondo o entidad del sector público mientras no se ordenase su liquidación.**

#### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS.**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte del demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

- i) Los artículos 48, 53, 335<sup>14</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política;
- ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>15</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3° del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>16</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>17</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> **ARTICULO 3º-Efectos de la desvinculación laboral de funcionarios públicos.** Los servidores públicos que a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones se encontraban afiliados a las cajas, fondos o entidades de seguridad social de que trata el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 100 de 1993 y se desvinculen de la entidad pública a través de la cual estaban afiliados a dichas cajas, fondos o entidades, para continuar cotizando al sistema general de pensiones deberán afiliarse al Instituto de los Seguros Sociales o a una administradora de pensiones del régimen de ahorro individual, salvo que su vinculación a la otra entidad se produzca sin solución de continuidad, esto en los términos del artículo 60 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

<sup>14</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>15</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

<sup>16</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>17</sup> **Se les prohíbe: “No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades**

Adicionalmente es pertinente hacer un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, que estructura el tema, y está contenida en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2877, SL4811 de 2020, y SL1217, SL782 de 2021, basada en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, la obligación consagrada en el numeral 1.º del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, de *“suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen”*. No pudiéndose predicar como sostiene la pasiva, ni la Superintendencia Financiera que, la existencia del deber de asesoría, solo se originó desde la expedición de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

Advierte esa Alta Corporación de Justicia sobre la necesidad de que la decisión del traslado de Régimen esté precedida de toda información relevante que el Fondo de pensiones proporcione a quien pretenda afiliarse, la cual, debe ser suficiente, completa y clara sobre las implicaciones que le conllevaría dejar el anterior Régimen y sus posibles consecuencias futuras. Pues, conforme al Estatuto Financiero de la época en los Artículos 97 y siguientes, consagró que las administradas debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, los siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la

---

*vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.*

<sup>18</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP, respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.



ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, por ser determinante en ello, la falta de información al afiliado.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, enfatizando en la necesidad de demostrar en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, a fin de poder concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la CSJ en sentencias SL 1688-2019 y 373 de 2020, que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no beneficio transicional o si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “*dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado.*”

Por estas razones, lo argumentado por la pasiva en torno a que la suscripción del formulario acredita la libre e informada manifestación de voluntad del afiliado al momento del traslado, pues ello no constituye razón atendible para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que estuviese precedido de la satisfacción o del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, escuchó del asesor que tendría mejores garantías de pensión en dicho fondo.

Tampoco son admisibles los argumentos por la pasiva en torno a la capacidad del demandante al suscribir el formulario, o su obligatoriedad de informarse en relación con las consecuencias de la celebración del acto jurídico, o sus actos de relacionamiento al efectuar cotizaciones, conocer extractos y no efectuar el traslado de régimen cuando legalmente estuvo habilitado para hacerlo, el no efectuar comparaciones entre fondos, o que las condiciones de funcionamiento de estos no son imposición de los mismos, si no de la normatividad que los rige, no constituyen razones atendibles para exonerar del cumplimiento de sus obligaciones a la Administradora, menos aún, por cuanto, en los asuntos como el presente, no se discute la capacidad jurídica de los celebrantes, ni la licitud de los traslados; se atiende es al hecho de haberse dado el traslado de régimen pensional sin que el mismo estuviese precedido de la satisfacción del cumplimiento del deber de información por parte de la administradora que captó al afiliado, quien, según sus dichos al absolver el interrogatorio de parte, escuchó del asesor que el ISS estaba en

quiebra y desaparecería siendo su mejor opción pensional suscribir traslado al régimen privado.

Tampoco son admisibles los argumentos expresados por la pasiva, en cuanto a que éste obedeció a una decisión espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley, y se satisfizo el deber de información en los términos exigidos para entonces; situación que tampoco acreditó Porvenir S.A, limitándose a afirmar que así había ocurrido.

No pudiéndose aplicar tampoco, al aquí demandante la regulación de 2010 sobre deber del consumidor financiero, por cuanto su traslado se firmó en el año 1997 cuando no existía esa disposición, pero sí estaba vigente y se ha consolidado la que ha obligado a las AFP a brindar la información no bastando con la suscripción del formulario de afiliación, por cuanto su uso, no exime, ni avala la omisión de los deberes impuestos por las leyes a las AFP, y por tanto, se reitera, que previo a la suscripción de ese formulario, éstas entidades deben en un acto responsable y comprometido con su función social, dar a conocer a los potenciales afiliados, todas las implicaciones del traslado, como sostuvo la Corte en **sentencia SL 4360 de 2019** Radicado 68852.

En cuanto a la inconformidad sobre la carga de la prueba, con dicho precedente, se desvirtúa además la aplicación al actor del principio de auto responsabilidad de los hechos afirmados en la demanda, pues en este caso, en virtud de la carga dinámica de la prueba ésta se radica en cabeza de las AFP que a través de sus agentes propiciaron el traslado de régimen del asegurado, tal y como se aprecia en la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es la AFP a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, al hallarse en mejor posición de ilustrarlo, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado, además, de estar facultado el fallador por el **artículo 167 del Código General del Proceso**, para distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos de convicción tendientes a esclarecer el objeto del litigio y en asuntos como el que hoy nos ocupa, sin duda quien debe cumplir dicha carga es la AFP del RAIS, por cuanto: **i) Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, así como la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, y la que se le haya entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **ii) Conoce y posee los datos de ubicación y preparación que recibió el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y posibilitó que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

En el sub-lite, mediante la prueba documental arribada, se evidencia que Álvaro Ochoa Arias nació el 17 de febrero de 1958<sup>19</sup>, por lo que, al 30 de junio de 1995,

---

<sup>19</sup> 01PrimeraInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 32. No se aportó registro civil de nacimiento, pero si de su cédula de ciudadanía que indica tal fecha la cual no fue discutida por la pasiva dentro del proceso.

cuando entró en vigencia el SGSSP para él, por encontrarse vinculado al servicio del Departamento de Antioquia<sup>20</sup>, entidad pública del orden departamental, contaba con 37 años de edad y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, no fue beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El 4 de agosto de 1997 suscribió formulario de afiliación ante la AFP Porvenir S.A.<sup>21</sup>, el cual se acusa de ineficaz y el 7 de febrero de 2020, radicó ante Colpensiones, petición deprecando lo pretendido en la demanda<sup>22</sup>, sin que esta hubiera sido resuelta, o por lo menos no obra respuesta de ella en el expediente.

Adicionalmente, fue recaudado interrogatorio al demandante, sin que se produjera confesión de su parte, pues en torno a las condiciones presentadas durante su traslado hacia el RAIS, manifestó que se encontraba laborando en la compañía Plásticos Desechables de Colombia S.A. y fue abordado por un funcionario de Porvenir S.A quien en una reunión que duró unos 5 minutos, le expuso que el ISS estaba en quiebra e iba a desaparecer, por lo que le convenía trasladarse a este fondo privado, donde gozaría de beneficios como la heredabilidad de sus aportes, lo cual no ocurría en el régimen público, más nunca le explicaron características o diferencias de ambos regímenes pensionales.

En este caso, la pasiva no acreditó la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar al hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto de la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que le generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en el posible afiliado, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha aclarado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

De ello no hay elementos de convicción en el plenario distintos al formulario de afiliación en ésta, sobre la cual Porvenir S.A. adujo que, estando suscritos por el demandante, quien lo hizo de manera libre y voluntaria, no es dable restarle valor y menos desconocer este acto; sin embargo, en este sentido, las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil

---

<sup>20</sup> 01PrimeraInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 57.

<sup>21</sup> 01PrimeraInstancia; 02Demanda.pdf, Pág. 45.

<sup>22</sup> 01PrimeraInstancia; 02Demanda. Págs 62/64

corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. conforme al **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado recae en quien debió emplearlo y, ello no se satisface solo con allegar documentos previamente elaborados en los que se limita a llenar espacios en blanco, que suscriben las partes, sino con la evidencia real de que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre, y que la asesoría brindada fue suficiente para la persona. Lo cual, es acorde con lo normado en **los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994**, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, según los cuales, no se trata sólo de completar un formato, ni adherir a una cláusula genérica, sino de haber transmitido elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, sea que estuviere o no la persona en transición.

Los considerandos de esta providencia también sustentan que, esta sala no acoja lo interpretado por la pasiva en el sentido de que los actos del demandante posteriores al traslado, como su prolongado silencio, o el sufragar aportes, fueren indicadores de su intención de pertenecer al Régimen de Ahorro Individual, debiendo recordarse el reiterado precedente de la Sala de Casación Laboral, según el cual, el debate probatorio en los asuntos de ineficacia de traslado se encamina a establecer si, con anterioridad y al momento del acto de traslado, se cumplió el tantas veces nombrado deber de información, **sin considerar los actos posteriores que el afiliado pudiese realizar**, pues la jurisprudencia del órgano de cierre en materia de seguridad social ha dilucidado de manera uniforme que, si la debida asesoría no se brinda con anterioridad y/o al momento de la materialización del traslado, al no cumplir su propósito de generar consentimiento informado para el acto de traslado, se equipara a la ausencia de información (**SL1688-2019, SL2877-2020, SL2937-2021, SL3349-2021**), y adicionalmente, esa falta de información en esta materia, no se convalida por los traslados de administradoras dentro del Régimen de Ahorro Individual (SL3199-2021).

De ahí que, no procede adoptar el criterio aislado contenido en la providencia **SL2440-2021**<sup>23</sup>, donde una de las Salas de Descongestión de la CSJ., expuso la tesis de los llamados “actos de relacionamiento,” que valga anotar, había formulado la Sala de Casación Laboral permanente en la SL413-2018, en un proceso donde se debatía el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, y fue necesario analizar la voluntad de permanencia del afiliado en un específico régimen pensional, por cuanto no resultaba diáfano a cuál de los regímenes pertenecía, litigio notoriamente ajeno a los asuntos de ineficacia de traslado de régimen pensional.

Conforme al precedente en cita, acogido por esta Sala, el incumplimiento de las mencionadas obligaciones de información por parte de Porvenir S.A., vulneradora de la libre y voluntaria selección de régimen prevista en el literal b del Artículo 13 de la ley

---

<sup>23</sup> por la Sala de Descongestión No. 4 de la Sala de Casación Laboral

100 de 1993<sup>24</sup> genera consecuentemente la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, como respuesta jurídica a la transgresión de ese deber legal y ello implica que, el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado en **sentencia SL-4360 de 2019**, concluyendo en que: *“la sanción impuesta en el artículo 271<sup>25</sup> de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”*, lo cual, da lugar a garantizar al accionante el ejercicio del derecho a la libre selección de régimen pensional, y dado que ha manifestado a lo largo del proceso, desde el escrito de demanda, que su voluntad es pertenecer al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES, y a declarar que ha permanecido afiliado, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar en este aspecto y por las razones expuestas** la sentencia.

## **b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia**

Atendiendo al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, con el fin de que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios, y fundamentalmente se garantice la no afectación financiera del Régimen de Prima Media, y pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo, producto de la declaratoria de ineficacia, todos los recursos recibidos con motivo de la afiliación al régimen de Ahorro Individual, deben trasladarse a la administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto, tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, dado que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional se cubren las prestaciones causadas. Además de ser menester que, por efecto de la declaratoria de la ineficacia en asuntos como el abordado en este proceso, la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información garantice que el patrimonio de la persona inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él.

---

<sup>24</sup> **13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.

<sup>25</sup> El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud<sup><1></sup> en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.

Bajo las referidas premisas, se **confirmarán, modificarán y adicionarán** las órdenes impartidas a **Porvenir S.A.** desde la primera instancia, en el sentido que esta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, no solo debe trasladar a COLPENSIONES la **totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros que se han generado durante todo el tiempo en que el hoy demandante figuró como afiliado al RAIS.

**Sino que Porvenir S.A, también deben trasladar a la referida AFP del RPM, las cuotas de administración, el dinero con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y las sumas adicionales de las aseguradoras,** conceptos descontados durante el periodo de afiliación del hoy demandante, pues no se discute la legalidad de tales descuentos, ni, si el dinero del afiliado fue administrado adecuada y eficientemente, sino que, como consecuencia de la ineficacia del traslado inicial al RAIS, y por no haberse estudiado previamente a la afiliación de la situación particular del hoy demandante, e ignorándose verdaderamente cuáles fueron los argumentos esgrimidos por dicha AFP para aseverar que cumplió con los deberes de información que sostiene haberle dado, no es pertinente exonerarla de la devolución de tales conceptos, independientemente de que Colpensiones no haya administrado el dinero del afiliado, ni asumido los riesgos que esa actividad conlleva, no pudiendo discutir inexistencia de motivos para entregarlos, detrimento patrimonial, ni enriquecimiento sin causa para Colpensiones y el demandante, tampoco transgrede derechos de las demandadas, por evidenciarse la omisión de asesoría completa y previa a la migración de la accionante hacia el RAIS y dentro de ese mismo régimen, pues si bien existió una administración por parte de la AFP del RAIS, además del pago de seguros, consecuentemente a la declaratoria de ineficacia, todos los recursos deben trasladarse a Colpensiones, administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de la pensión que se genere en favor del hoy demandante, como anteriormente se explicó.

Se rememora que, para efecto de la devolución de conceptos hacia el RPM, con anterioridad, esta Sala de Decisión disponía que, el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente de la Corte Constitucional plasmado en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 de 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM, **y de otro lado**, y se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitieran con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, tema que forma parte del recurso de apelación, ante las órdenes impartidas en la primera instancia que aquí se confirma.

Pero, retomando el punto, y por las mismas razones expuestas en este acápite, considerando el precedente de la Sala de Casación Laboral<sup>26</sup> contenido en sentencias

---

<sup>26</sup> Esta Sala atiende el precedente judicial original de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 y dando aplicación al artículo 1746 del Código Civil, en los cuales fundamentan la *ratio decidendi* de estos procesos, donde esa Alta Corporación

**SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021 y SL 3709-2021**, esta Sala ha precisado que las cuotas de administración y los descuentos del seguro previsional, descontadas por las AFP del RAIS durante el periodo de afiliación de la hoy demandante ante ellas, se deben trasladar debidamente **indexadas** y con cargo a sus propios recursos, aspecto en el cual, se confirmará la sentencia de instancia, con el fin de que se satisfagan en su valor actualizado, dado que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda colombiana constituye un hecho notorio, no pudiendo acogerse en tal sentido, lo apelado por Porvenir S.A.

Al momento de cumplirse esta sentencia, los conceptos deberán aparecer detallados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, y se homologarán en el régimen de prima media las semanas cotizadas por el actor durante su afiliación en el RAIS.

Así las cosas, se **confirmará, modificará y adicionará** la sentencia conocida en apelación.

### III. EXCEPCIONES

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae y el reconocimiento pensional se presentó como una de las consecuencias del retorno al RPM administrado por Colpensiones, además esta Sala, acoge la postura pacífica de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Finalmente, se tiene que el Juez A Quo declaró probada la excepción de ausencia de prueba del vicio del consentimiento, la cual debe **revocarse** porque la insuficiente

---

determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, si los hubiere, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora, por tanto, se adopta en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia, ordenando a Porvenir S.A., que traslade a Colpensiones, los valores descontados al demandante durante el tiempo de su afiliación en ella, por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, y con cargo a sus propios recursos, sumas adicionales de las aseguradoras, además de las comisiones de administración.

asesoría sobre los puntos del tránsito de régimen es indicadora de que la decisión de suscripción de la afiliación al RAIS no estuvo precedida de la comprensión suficiente y menos aún del real consentimiento para adoptarla.

#### IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para 2023 (1 SMLMV) en favor del demandante.

#### V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín el 5 de octubre de 2022, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por ÁLVARO OCHOA ARIAS contra COLPENSIONES y PORVENIR S.A, **modificándola y adicionándola**, en el sentido en que esta última:

Debe trasladar con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que el demandante ha figurado como afiliado a dicho régimen, así como los valores descontados al actor por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, y con cargo a sus propios recursos, trasladarán debidamente indexados a Colpensiones el valor de comisiones de administración y primas de seguros descontados en el mismo lapso que permaneció como afiliado ante ella.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PORVENIR S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PORVENIR S.A los recursos correspondientes a los conceptos aludidos, e incorporar los respectivos aportes pensionales completos en la historia laboral del demandante como si hubiera permanecido en el RPM.

**SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE** el numeral CUARTO de la referida providencia, en cuanto declaró probada la excepción de *ausencia de prueba del vicio en el consentimiento*, para en su lugar, declarar que el traslado que el demandante hiciere hacia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- administrado por Porvenir S.A. es ineficaz.



**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. Agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente en 2023 (1SMLMV) y en favor del demandante.

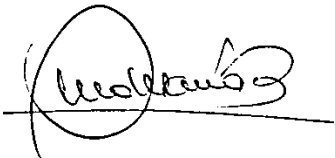
Se ordena notificar lo decidido por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN